



## SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

**Medellín, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés**

Se procede a resolver la solicitud de **“adecuación de la condena en costas”** formulada respecto de la sentencia proferida en la acción popular promovida por **BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ** contra **RÉDITOS COLOMBIA SA**.

### **1. ANTECEDENTES**

**1.1** Dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida el 16 de agosto de 2023, el actor popular solicitó **“adecuación de la condena en costas”** con fundamento en lo previsto en el artículo 318 del CGP, pretendiendo **“que se ordene a la juez –de primera instancia-, respetar y aplicar de manera objetiva e imparcial, los criterios y mandatos legales”** e indicando, **“PRIMERO: el fallo de 1ª instancia prevaricando, porque fija la tarifa de las costas (agencias) en MEDIO SALARIO MINIMO, lo que está en contravía de la LEY POSITIVA VIGENTE que adicionalmente no se adecua a los mandatos de las normas pertinentes... SEGUNDO: la sentencia de primera instancia SI fue apelada por la accionada, POR lo tanto, PIDO al despacho que en esta instancia también sea condenada en costas, como lo manda la LEY.”**

**1.2** En sentencia del 16 de agosto de 2023, *“En segunda instancia no se condenará en costas, porque el apelante único – actor popular no actuó en forma temeraria o de mala fe, como lo consagra el artículo 38 de la Ley 472 de 1998.; además, el único apelante fue el actor popular.”*

## **2. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER**

**¿Es procedente la “adecuación de la condena en costas” solicitada por el actor popular?**

## **3. CONSIDERACIONES**

El artículo 318 del CGP consagra lo relativo al recurso de reposición que procede únicamente *“contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen”* (subrayas propias); por ende contra la sentencia de segunda instancia no procede el recurso de reposición; dicha decisión desata la litis en forma definitiva después de surtirse la primera y la segunda instancia.

Advierte el artículo 285 del mismo estatuto procesal que, *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella”* (destacado fuera de texto).

Revisada la solicitud incoada por el actor popular, se advierte que no resulta procedente resolverla misma vía recurso de reposición de la sentencia porque dicho recurso es improcedente.

Ahora, si lo pretendido por el actor es la aclaración de la sentencia en los términos del artículo 285, la misma no contiene “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda.”

Dispone el artículo 328 del CGP la competencia del Juez para pronunciarse en sede de apelación indicando que, *“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la Ley...”*

Lo que guarda relación con el principio de congruencia; siendo menester referenciar al Consejo de Estado:

*“La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación y no por el mero acto procesal dispositivo de parte, a través del cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la respectiva providencia. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez de la apelación, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la “non reformatio in pejus”, en caso de que sea apelante único, introducido como precepto en el artículo 31 de la Constitución Política y consagrado por el artículo 357 del C. de P. C. y, en segundo orden, por el objeto mismo del recurso de apelación (revocar o modificar la providencia), cuyo marco está definido, a su*

*vez, por las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.*

*Así, pues, al juez de segundo grado le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primer grado que son aceptados por el recurrente (bien porque omite reargüirlos en la sustentación del recurso de apelación o bien porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos), pues éstos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos, fenece por completo el litigio o la controversia”<sup>1</sup> (subrayas propias e intencionales).*

Revisado el expediente, se advierte que la demandada formuló reparos en primera instancia que no fueron sustentados en la oportunidad ni ante la segunda instancia; por tanto, a través de providencia del 26 de junio de 2023 se declaró desierto.

La decisión en segunda instancia fue únicamente respecto de los reparos del actor popular; decidida desfavorablemente la apelación, lo procedente era dar aplicación al numeral 1 del artículo 365 del CGP disponer que, “*En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...*”(subrayas intencionales).

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de febrero de 2015. Rad. 28278

Sin embargo, tratándose de una acción popular, se remite el fallador a disposición especial prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, “...***Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. ....***”

Teniendo en cuenta lo precedente, no se efectuó condena en costas al considerarse por esta Sala Civil que “*el actor popular no actuó en forma temeraria o de mala fe.*”

Con respecto a los reparos planteados por el monto de las agencias en derecho fijadas en primera instancia, dispone el numeral 5° del artículo 366 del CGP que, “***Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obediencia a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas...5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costa...***”

Lo correspondiente con las agencias en derecho que se causaron en primera instancia, debe ser discutido en la etapa legal que corresponde y ante el funcionario competente, conforme el delineamiento dado en la norma procesal.

Así lo refirió en sede de tutela la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC3869-2020, “...***Como se mencionó, la liquidación es un acto procedimental particular, susceptible de los medios***

***defensivos según la naturaleza o cuantía del litigio, en el cual, únicamente se controvierten los montos que se causaron, en beneficio de la parte favorecida, con la definición de la controversia, y la inclusión de las agencias previamente señaladas en una decisión ejecutoriada.***

En conclusión, no resulta procedente en esta instancia acceder a la modificación de las agencias en derecho fijadas por el Juzgado de primera instancia; razón por la cual se NEGARÁ la “adecuación de la condena en costas.”

### **DECISIÓN**

**La SALA SEGUNDA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

### **RESUELVE**

Por las razones expuestas, **NIEGA** la solicitud de adecuación de la condena en costas.

**NOTIFÍQUESE POR ESTADOS ELECTRÓNICOS** lo resuelto y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

### **MAGISTRADOS**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**

05001-31-03-002-2018-00207-01

Acción popular

Demandante: Bernardo Abel Hoyos Martínez

Demandado: Réditos Colombia SA

Decisión: Niega solicitud.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a large circular flourish at the beginning and a long horizontal stroke extending to the right.

**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha Cecilia Lema Villada', with a stylized, cursive script.

**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**